

004/2026**I**

El Anteproyecto de Ley Orgánica sometido a informe regula, en el ámbito del derecho nacional, los derechos fundamentales reconocidos en el art. 18.1 de la Constitución, hoy en día recogidos, con carácter general, en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a la que viene a derogar.

Además de lo anterior, el art. 18.4 del texto constitucional reconoce también el derecho fundamental a la protección de datos personales, con el que los derechos del apartado 1 están íntimamente conectados, tal y como con acierto recoge el texto presentado a informe, y de manera especial y acertada reconoce igualmente la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) presentada junto con el texto del Anteproyecto.

Así, en especial el derecho a la propia imagen y a la intimidad personal y el derecho fundamental a la protección de datos personales son derechos distintos, pero normalmente concurrentes sobre su objeto, puesto que la imagen, o la voz, objeto de especial atención en el anteproyecto, en cuanto son “elementos propios de la identidad física de un sujeto” son, asimismo, datos personales, conforme a la definición que de “dato personal” establece el art. 4.1 del RGPD.

*toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea **o uno o varios elementos propios de la identidad física**, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;*

Así, como es reconocido, el derecho fundamental a la protección de datos personales (inicialmente derecho a la intimidad frente al uso de la tecnología/informática) surge primeramente como una extensión del derecho a la intimidad (“Privacy”), con orígenes en la jurisprudencia norteamericana de finales del siglo XIX (“right to be let alone”), y ya en el siglo XX, a partir de 1967, con la comisión consultiva del Consejo de Europa, para el estudio de las tecnologías de la información en relación con las personas y su derecho a no sufrir injerencias en la vida privada, derecho a la privacidad que ya se había

recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, en el Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950 –art. 8- y en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos –PIDCP- de 1966, como también acertadamente recoge la Exposición de Motivos del anteproyecto. Las conclusiones de esta comisión influyeron en la adopción del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Convenio 108 del Consejo de Europa), que es instrumento jurídico internacional vinculante en materia de protección de datos.

Ahora bien, a diferencia del derecho a la intimidad, o a la propia imagen, en cuanto limitado a datos íntimos, privados, o específicos, el derecho fundamental a la protección de datos personales se reconoce en el artículo 18.4 CE, y garantiza el control sobre *cualquier* dato personal (no solo la imagen), su tratamiento y su destino, evitando un uso ilícito o contrario a la dignidad. Así se ha ocupado de recordarlo el Tribunal Constitucional, de cuyas sentencias cabe citar aquí, por su claridad, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6º.

*6. La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 8). En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En fin, el derecho a la intimidad permite excluir **ciertos datos** de una persona del conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo ha dicho este Tribunal (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 5; 144/1999, FJ 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 115/2000, de 10 de mayo, FJ 4), es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida. El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Pero ese poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin.*

*De ahí la singularidad del **derecho a la protección de datos**, pues, por un lado, **su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad**, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la*

personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 de octubre, FJ 4), como el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE, e igualmente, en expresión bien amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado.

*De este modo, **el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo**, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, **también alcanza a aquellos datos personales públicos**, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.*

Pero también el derecho fundamental a la protección de datos posee una segunda peculiaridad que lo distingue de otros, como el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE. Dicha peculiaridad radica en su contenido, ya que a diferencia de este último, que confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5; 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; 89/1987, de 3 de junio, FJ 3; 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3, y en general las SSTC 134/1999, de 15 de julio, 144/1999, de 22 de julio, y 115/2000, de 10 de mayo), el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar

a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales (STC 254/1993, FJ 7).

Del mismo modo, ambos derechos, el respeto a la vida privada y familiar, y el derecho a la protección de datos personales, se reconocen, por separado en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, último texto publicado en el DOUE de 7 de junio de 2016, C 202/389 y ss.

Ahora bien, y tal y como resulta del texto del art. 18 de la Constitución, y refleja la jurisprudencia, la intromisión en el derecho fundamental a la intimidad o al honor suele estar conectada, en mayor o menos medida, con la necesidad de protección igualmente al derecho fundamental a la protección de datos, planteándose normalmente esta cuestión tanto ante la jurisdicción ordinaria como en amparo ante el Tribunal Constitucional. Así, por ejemplo, en la STC 58/2018, de 4 de junio, el Tribunal Constitucional trata la cuestión del (FJ 1º)

[...] conflicto entre, de un lado, los derechos al honor y a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la protección de datos personales (art. 18.4 CE) y, de otro, el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE]. Pero este conflicto adopta, en este caso, matices singulares que tienen que ver con el modo en que la intimidad de las personas titulares de este derecho se ve expuesta con el uso de las tecnologías de la información, en particular con el uso de internet; con la forma en que las herramientas informáticas desarrolladas para facilitar el acceso a la información, como los buscadores, afectan singularmente a los datos personales de la ciudadanía; con el modo en que el transcurso del tiempo puede llegar a influir en los equilibrios entre derecho al honor y la intimidad (art. 18.1 CE) y las libertades informativas [art. 20.1. d) CE],

Y en esa misma sentencia recuerda, con cita de la STC 290/2000, de 30 de noviembre, que:

*(...) el artículo 18.4 CE [esto es, el derecho fundamental a la protección de datos personales], contiene un **instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor** y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos, **sin que, por ello, deje de ser un derecho fundamental**, “el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento automatizado de datos” (STC 290/2000, FJ 7).*

Esto es, siendo, como es, un derecho fundamental en sí mismo, el derecho fundamental a la protección de datos personales es a su vez un *instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor* esto es, un instrumento a través del cual los derechos fundamentales a la intimidad, el honor o la propia imagen, pueden ser defendidos frente a intromisiones ilegítimas.

Esta reflexión nos servirá más adelante al comentar el texto de la norma sometida a informe, y establecida así la relación entre ambos preceptos, el art. 18.1 y el 18.4 de la Constitución, pasamos al texto del Anteproyecto.

II

El **art. 1.3 del anteproyecto** establece una relación con la normativa de protección de datos que esta Agencia considera correcta y acertada. Dice así el precepto:

Las disposiciones de esta ley orgánica se entienden sin perjuicio del régimen especial de protección de los datos personales de las personas físicas establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en las demás normas de aplicación en esa materia.

La MAIN (pág. 47-48) justifica, de nuevo, en opinión de esta Agencia, acertadamente, la necesidad de *engarce* del anteproyecto en el “*reconocimiento expreso de su especialidad*”, pues, como ya se ha expuesto, el derecho fundamental a la protección de los datos personales constituye en sí mismo un derecho fundamental con su propia sustantividad. Y ello, como añade la MAIN, no sólo por los derechos genéricos, que como haz de facultades reconoce la doctrina del Tribunal Constitucional que se comprenden en el mismo (Acceso, Rectificación, Supresión (derecho al olvido), Limitación del tratamiento, Portabilidad, Oposición, o no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, sino por los específicos derechos contenidos en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que hace referencia a la “Garantía de los derechos digitales”, algunos de los cuales -continúa la propia MAIN- *constituyen una clara proyección en este ámbito de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen*, como es el caso de:

- La regla de protección de los menores en internet contenida en el artículo 84.2
- El derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86).

- El derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (artículo 87).
- El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (artículo 88).
- El derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (artículo 89).
- El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (artículo 90).
- Las reglas de protección de datos de los menores en Internet contenidas en el artículo 92.
- El derecho al olvido en búsquedas de Internet (artículo 93).
- El derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (artículo 94).
- El derecho al testamento digital (artículo 96).

En definitiva, esta Agencia estima correcta la consideración de la normativa de protección de datos como norma especial que establece el art. 1.3 del anteproyecto.

III

Dicha consideración como norma especial, en cuanto derecho fundamental autónomo, no puede hacer olvidar, sin embargo, la consideración que el Tribunal Constitucional ha hecho del mismo como un *instituto de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos* (SSTC 58/2018 o 290/2000, ya citadas).

Así, es habitual que las cuestiones que se presentan en relación con el art. 18.1 CE (derechos al honor, la intimidad o la propia imagen) involucren también aspectos relacionados con el derecho a la protección de datos del art. 18.4 CE. Ya hemos mencionado la STC 58/2018, o, a título de mero ejemplo, por lo común de ello, entre las sentencias más recientes del Tribunal Supremo la 1835/2025, de 12 de diciembre de 2025, o la 1425/2025 de 13 de octubre, en las que se acciona por el interesado acumuladamente alegando la violación e intromisión ilegítima en su derecho al *honor* por la inclusión indebida de sus

datos personales y consecuente violación igualmente de dicho derecho, en un sistema de información crediticia (art. 20 LOPDGDD).

Ello lleva a esta Agencia a la **Disposición Final primera, apartado Dos**, del anteproyecto, en cuanto añade un nuevo párrafo 11.^a al artículo 727 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción:

11.^a La retirada de las imágenes o voces de personas, ya sean reales, manipuladas o simuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen.

Hay que recalcar aquí que el RGPD no considera que la vía que abre dicha norma (el RGPD), -esto es, reclamación ante la Autoridad de Control y posterior recurso ante su decisión - sea la única posible, exclusiva o excluyente. Bien al contrario. Los arts. 77 a 79 RGPD establecen que las acciones que reconocen estos preceptos (Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control; Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento) lo son *sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial o extrajudicial*.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 12 de enero de 2023, C-132/21, apartado 35 y 42, ya ha resuelto que los interesados no tienen por qué acudir, necesariamente o con carácter previo, a la Autoridad de control para accionar en defensa frente a violaciones legítimas de su derecho fundamental a la protección de datos personales, sino que es posible acudir directamente en defensas de dicho derecho a los tribunales o cualquier otro recurso disponible.

*35. Antes de nada, del tenor de estas disposiciones resulta que el Reglamento 2016/679 no establece una competencia prioritaria o exclusiva ni ninguna regla de primacía de la apreciación efectuada por la **autoridad o por los órganos jurisdiccionales** a los que hace referencia en cuanto a la existencia de una vulneración de los derechos conferidos por ese Reglamento. Por lo tanto, el recurso previsto en el artículo 78, apartado 1, del citado Reglamento, cuyo objeto es el examen de la legalidad de la decisión de una autoridad de control adoptada sobre la base del artículo 77 de dicho Reglamento, y el previsto en el artículo 79, apartado 1, de ese mismo Reglamento **pueden ejercerse de manera concurrente e independiente**.*

42. Por último, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por dicho Reglamento, de su considerando 10 se desprende que este tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de datos personales en la Unión. El

*considerando 11 del mismo Reglamento señala, además, que la protección efectiva de estos datos exige que se refuercen los derechos de los interesados. Como señaló el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, **la decisión del legislador de la Unión de conceder a los interesados la posibilidad de ejercitar de forma concurrente e independiente las vías de recurso** previstas, por una parte, en los artículos 77, apartado 1, y 78, apartado 1, del Reglamento 2016/679 y, por otra parte, en el artículo 79, apartado 1, de ese mismo Reglamento se enmarca en el objetivo del citado Reglamento.*

Por lo tanto, es posible, y frecuente, como hemos visto, la existencia de acciones judiciales en defensa del derecho fundamental a la protección de datos como instituto de garantía de los derechos de la personalidad a que se refiere el art. 18.1 CE.

Por esta razón se considera conveniente por esta Agencia, por servir al objetivo del RGPD de *garantizar un nivel elevado de protección de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de datos personales* (STJUE C-132/21, ya citada) que esa medida cautelar que se pretende añadir al artículo 727 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, respecto de la retirada de las *imágenes o voces de personas*, se preceptúe no sólo cuando puedan afectar al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen, sino también al derecho fundamental a la protección de datos personales. En tanto en cuanto las *imágenes o voces de personas* son datos personales conforme al art. 4.1 RGPD, ya transcrito, el engarce que pretende la norma informada entre los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen y el derecho fundamental a la protección de datos no quedaría completo si dicha medida cautelar en sede judicial no se extendiera también a los procesos en los que pudiera estar en juego el derecho fundamental a la protección de datos.

Así, se sugiere que dicha Disposición final primera, del anteproyecto informado tenga la siguiente redacción:

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se modifica el artículo 727 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los términos siguientes:

Uno. El actual párrafo 11.^a pasa a numerarse como 12.^a

Dos. Se añade un nuevo párrafo 11.^a con la siguiente redacción:

*«11.^a La retirada de las imágenes o voces de personas, ya sean reales, manipuladas o simuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar, **e a su propia imagen, o a su derecho fundamental a la protección de datos personales**».*

IV

Se sugiere modificar ligeramente la redacción del primer párrafo de la Exposición de Motivos, cuando dice que estos derechos son los que están “*más directamente*” relacionados con la dignidad de las personas, por cuanto no tiene en cuenta la existencia de derechos fundamentales previos y necesarios para ello, como puede ser el derecho a la vida o la integridad física y moral del art. 15 CE, o que la dignidad de la persona se configura sobre el conjunto de derechos fundamentales *inviolables* que le son *inherentes* (art. 10 CE), sin que quepa una gradación en ellos, pues todos ellos gozan de la misma protección (art. 53 CE).

En el art. 4 del anteproyecto se añade al texto ya existente en la ley orgánica (LO) 1/1982 (art. Tercero) la presunción de que la persona menor mayor de dieciséis años tiene madurez suficiente. Tanto la Exposición de Motivos como la Memoria (MAIN) la configuran como una presunción iuris tantum, esto, que admite prueba en contrario, aunque no la determina así en el texto del artículo, si bien dicha omisión vendría cubierta por lo dispuesto en el art. 385.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De todas maneras, esta Agencia sugiere, si bien reconoce que la consideración de la madurez del menor es la redacción existente en la LO 1/1982 desde su inicio sin que parezca haber dado problemas en su aplicación, que el prelegislador considere que puede haber una cierta dispersión en la manera de prestar ese consentimiento por los menores en los distintos ámbitos jurídicos relacionados. No nos estamos refiriendo a la consideración expresa de que frente a la sola referencia a la “madurez” en el texto de la LO 1/1982, ahora se considera que dicha madurez se presume a los dieciséis años (pues la MAIN ya indica que *ha tenido en cuenta que el Proyecto de Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, eleva de 14 a 16 años la edad que el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, fija para consentir el tratamiento de datos personales, un ámbito que guarda evidentes conexiones con la presente ley*), sino al hecho de que en otros ámbitos dicha referencia a la madurez no existe, sino que toma únicamente en cuenta la edad, de los dieciséis años. Así, la propia MAIN pone de relieve, como guardando gran similitud con el presente caso, una serie de supuestos en que esta misma edad (16 años) es tomada como referencia en otras leyes al disponer la autonomía de la voluntad de los menores mayores de 16 años. Pero en ninguna de ellas se hace referencia a la “madurez”, presumiéndose esta en los 16 años, sino directamente que los menores mayores de 16 años pueden adoptar dichas decisiones. De hecho, el propio art. 7.1 LOPDGDD configura la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años (estando en las Cortes el citado proyecto de ley que eleva de 14 a 16 años esa edad), sin referencia a la madurez. O la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que

se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, permite a las mujeres mayores de 16 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales (art. 13 bis), igualmente sin referencia a su “madurez”. Por esta razón podría el legislador plantearse, para evitar dicha discrepancia, y en consecuencia promover la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) en la manera de considerar a los menores mayores de 16 años de la misma manera para prestar su consentimiento respecto de cada uno de los derechos fundamentales que les atañen. Entre otras cosas, por lo que respecta al presente anteproyecto, porque además su art. 7.2 ya considera, como garantía del menor, que incluso si consta el consentimiento del menor (ya sea menor de 16 o mayor de 16) o de sus representantes legales, se considerará ilegítima cualquier intromisión en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de la persona menor de edad que implique menoscabo de su dignidad o de su reputación o sea contraria a sus intereses. Con la fijación de la edad para prestar consentimiento se añadiría por lo demás seguridad jurídica, por cuanto con la fórmula actual que hace referencia a la “madurez”, y como la MAIN reconoce expresamente, *no excluye que el consentimiento pueda ser prestado por un menor de 16 años si tiene madurez suficiente*.

El art. 6 del anteproyecto introduce, como afirma la MAIN, una disposición novedosa según la cual, *[e]l testador podrá prohibir la utilización de su imagen o de su voz, sean originales o modificadas, simuladas o manipuladas, para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Asimismo, podrá designar a una o varias personas para que autoricen o denieguen este tipo de usos*. Esta Agencia sugiere, sin embargo, que el prelegislador considere si, siendo la finalidad de la ley la de proteger civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, conforme establece su art. 1, no sería más inclinado a dicha finalidad establecer un principio contrario, esto es, considerar que el fallecido, a falta de declaración testamentaria, ha prohibido la utilización de su imagen o de su voz, sean originales o modificadas, simuladas o manipuladas, para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, puesto que con la redacción actual, lo que se desprende del precepto es que a falta de prohibición por el testador, dicha utilización de su imagen o de su voz, sean originales o modificadas, simuladas o manipuladas, para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga estaría permitida.

Tanto la MAIN (página 14 o 31) como la Exposición de Motivos hacen referencia al fenómeno de la “ultrasuplantación” (sic). Sin embargo, dicha expresión, inicialmente contenida en el art. 3 del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, Reglamento de Inteligencia Artificial, ha sido sustituida por la de “ultrafalsificación” en el art.

3.60 y en el art. 50.4 del mismo en virtud de la corrección de errores del RIA publicada en el DOUE de 9 de octubre de 2025.